

Los pueblos, las iglesias y el saque de la minería

El impacto de la industria minera, produce maneras de resistencia en las comunidades locales de todo el mundo. Veamos lo que cuentan representantes de movimientos protagonistas de una lucha, que la Iglesia endosa. Edwin no se entrega. Ana y el P. Joy tampoco. Con ellos están centenas de mujeres, hombres y comunidades que de todos los rincones del globo luchan contra el gigante que amenaza devorar a todos ellos, y el ambiente en donde viven. Este gigante es la industria minera, con todo el rastro de violentos impactos que ella provoca. Detrás de las excavaciones en las profundidades que hieren el terreno o la desintegración de las rocas para extraer metales preciosos, están las grandes compañías multinacionales y sus intereses con su potencial de intimidación contra quien desee obstaculizar proyectos maléficos para el ambiente y los habitantes del lugar. Sin embargo, al lado de los pueblos en lucha, están también las iglesias locales que abrazaron la “opción preferencial por los pobres”. Que la encíclica del Papa Francisco “Laudato sí” declina desde el principio, en su vocabulario ecologista, que a muchos observadores les pareció novedad para la Iglesia.

El P. Joy y Ana son, apenas, unos entre tantos de los protagonistas de tales luchas. Treinta de ellos, representantes de las comunidades locales afectadas por la minería, llegados de América, África y Asia, se reunieron en Roma para un encuentro de tres días (17-19 de julio). El encuentro, titulado: “Unidos a Dios escuchamos un grito”, ha sido organizado y promovido por el Pontificio consejo de Justicia y Paz, presidido por el cardenal Peter Turkson, con la colaboración de la red latinoamericana “[Iglesias y minería](#)”. A las comunidades invitadas a Roma, el Papa en su [mensaje](#) escribía: “Escuchemos el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente, por las consecuencias, muchas veces negativas, de las actividades de la minería. Un grito por las tierras perdidas; un grito por la extracción de las riquezas del subsuelo, que paradójicamente, no produce ninguna riqueza para la población local, que continúa pobre; un grito de dolor como reacción a la violencia, a las amenazas y a la corrupción; un grito de indignación y clamor por ayuda, a causa de las violaciones de los derechos humanos, que de forma sutil o descaradamente pisoteados en lo que se refiere a la salud de las personas, condiciones de trabajo, a veces por la esclavitud y tráfico de seres humanos, que alimenta el fenómeno trágico de la prostitución; un grito de tristeza e impotencia por la contaminación del agua, del aire y del suelo; un grito de incompreensión por falta de procesos inclusivos y de apoyo por parte de las autoridades civiles, locales y nacionales, que tienen el deber fundamental de promover el bien común.

La resistencia y la certeza en la fuerza de sus razones son la llave de los testimonios que recogemos en Roma, entre los representantes de las víctimas de la actividad minera.

La invasión de las multinacionales y el impacto de la industria minera

La lucha de Edwin Montenegro Dávila tiene su centro en un episodio acontecido a muchos kilómetros de distancia de su tierra. “En 2013, cuenta el peruano de 39 años, perteneciente a la etnia amazónica de los Awajun y representante, también de la etnia de los Wampis – fui visitar el Ministro del Medio Ambiente francés en París (en la época, el socialista Philippe Martin, ndr), también con la ayuda de la asociación [Secours Catholique](#). Cuando me presenté, yo estaba vestido de manera tradicional, con una corona de plumas de ave y ropa roja”. Él viajó durante tres días para llegar a la capital francesa, primero, de barco y autobús hasta la ciudad de Lima y luego de avión hasta Europa. “El ministro quedó admirado al verme en traje tradicional. Cuando le presenté las cartas contra la empresa minera, firmada por el pueblo que represento,, una comunidad de 65.000 personas, el ministro pidió disculpas, mil veces, por el mal hecho a

mi pueblo. Dijo: “Le prometo dialogar con la presidencia y dirección de la compañía y le escribiré rápidamente”. Fue lo que me aseguró. Sin embargo, nunca me respondió. La compañía en cuestión es la petrolífera francesa [Maurel et Prom](#). Junto con la canadiense [Pacific Rubiales](#), que extrae gas y petróleo, bajo la dirección de la minera colombiana Afrodita, estas empresas son protagonistas de la búsqueda de oro en la provincia de Condorcanqui en la Amazonia peruana, iniciada en 2007. “Extraen oro de la montaña, continúa Edwin. De esta manera contamina la fuente del río Senepa (en la divisa con El Ecuador). La sociedad baja al valle a través de los riachuelos”. La extracción del oro, a cielo abierto, usa grandes cantidades de cianuro, sumamente tóxico para plantas y animales. Incluso el Papa, alerta sobre los daños ambientales, producidos por la extracción del oro; en la Encíclica afirma: “muchas veces, las empresas que así operan, son multinacionales, que hacen aquí lo que no les es permitido en los países desarrollados o del llamado Primer Mundo” (Laudato sí, 51).

El impacto ambiental de las actividades mineras es enorme: “El agua que llega a las aldeas está contaminada y no es potable, tanto es así, que para beberla estamos obligados a buscarla en las fuentes más altas”, continúa Edwin. Por eso, los animales mueren. Más de 3.000 metros cuadrados han sido deforestados. “Al principio, nuestros niños se bañaban en los ríos, pero ya salían del agua con manchas e irritaciones en la piel. Ya hace tiempo que no vamos allá, cuenta el portavoz de los Awajun. Incluso, actualmente, ya no podemos comer la carne de los animales, que beben en las fuentes contaminadas, ni los peces que son comida tradicional de nuestra cocina. Además, se produce un efecto sobre la cultura. También se ha arruinado el artesanado, por ser peligroso para la salud el extraer el barro, con el cuál, hace siglos creamos objetos”. La minería arrancó el alma de los indígenas.

Comunidades locales y resistencia global

Nadie, jamás, ha pedido a las comunidades de la Amazonia, opinión sobre la implantación de la minería. Las multinacionales, al parecer, no tienen costumbre de hacerlo. Eso, sin embargo, es obligatorio por parte de la Organización Internacional del trabajo, al obligar a la “consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, para todos los proyectos que se instalen en sus territorios” (Convención 169). “Es indispensable dar la máxima atención a las comunidades indígenas con sus tradiciones culturales, avisa el Papa en la Encíclica Laudato Sí, 143. Ellas deben ser “las principales interlocutoras, sobretodo en el momento en que se avanza con grandes proyectos que interesan a sus territorios.

Desde el Perú hasta Guatemala es siempre lo mismo. Ana Sandoval (22 años), ha tomado parte en la lucha de la comunidad de S. José del Gulfo y S. Pedro Ayampuc, en Guatemala. El lugar de donde procede, ha sido invadido, años atrás, por un proyecto minero llamado “Progreso 7 Derivada”. El proyecto es parte de un plano más amplio, con 15 áreas de explotación, todas ellas concentradas en un pequeño país y ya, muy explotado, como es Guatemala.

La extracción de oro y plata es obra de la compañía guatemalteca [Exmingua](#), subsidiaria de la estadounidense [Kappes Cassidy & associated](#) (KCA), junto a la canadiense Radins Gold. Son tres multinacionales en un pequeño territorio y, además, habitado por comunidades indígenas, minorías étnicas, muchas veces no protegidas por los estados, o protegidas apenas en el papel. Toda el área en donde vive Ana, está sujeta a la contaminación por el arsénico, de tal manera que la concentración de este elemento encontrado en la comunidad de S. José, es mucho mayor que los límites aconsejados por la Organización Mundial de la Salud. Las rocas de esta región ya contienen gran cantidad de este elemento, que contamina, tanto el agua, cuanto el aire. Cuando una empresa minera comienza su actividad de extracción, se libera el arsénico contenido en las rocas y a él, se suma el mercurio, otro elemento tóxico, usado para purificar el oro.

La primera señal de alerta para los habitantes de S. José ha sido la falta de agua. "Vimos que no llegaba, pero ignorábamos la causa", cuenta Ana. "A nuestra petición de explicaciones, el Ministerio de la Salud respondía diciendo que eran informaciones confidenciales. Es notorio como el arsénico y el mercurio producen efectos devastadores en la piel y en la sangre.

A las omisiones de las autoridades, la comunidad respondió con una gran manifestación. En 2011 se nos dijo que en S. José no había proyecto algún, o que tal vez, sería implantado, en aquel local, solamente un centro comercial. Sin embargo, nosotros percibimos el engaño. Así, en el mes de marzo de 2012 bloqueamos una máquina escavadora. Toda la comunidad estaba allí. Nos hemos dicho a nosotros mismos: "de aquí no nos moveremos". Así, por más de tres años, el pueblo de La Puya, como ha sido llamada la comunidad en lucha, viene haciendo reclamación no violenta a la entrada de la mina. Se han organizado dos turnos de presencia de, al menos, 25 personas a cada 24 horas. Quien participaba organizaba actividades escolares o recreativas para los niños, allí mismo, en el local de la resistencia. A quien no le era posible ir, no dejaba de colaborar, incluso llevando alimentos para las personas que permanecían acampadas delante de la mina. Los piquetes, según Ana, envolvían en total 22.000 personas.

Un fenómeno parecido, de resistencia comunitaria y compartir, ha sido igualmente, el centro de lucha de los Awajun e Wampis en Guatemala. Edwin, el representante de la protesta de su pueblo, en realidad es el portavoz (vocero) de 65.000 indígenas y recibe apoyo como ejemplo de organizaciones de base.

Edwin describe este modo de sistema: "A lo largo del río Santiago existen 62 comunidades ribereñas, con sus jefes, llamados "apos". Éstos se reúnen y forman una federación. Enseguida, una asamblea general, elige un presidente de federación. En la provincia de Condorcanqui existen 12 federaciones, cada una con sesenta o más comunidades. Yo represento todo eso".

Lo que llevan en común, esas dos comunidades latinoamericanas, es la represión. En Guatemala, en 2014, la policía atacó a los manifestantes. "En el pasado mes de mayo, la policía nos atacó con gas lacrimógeno, palos y piedras", nos cuenta Ana, que estaba allí en el momento del ataque. "Una compañera, Eva, fue alcanzada por una bomba de gas lacrimógeno. Muchas otras personas sufrieron heridas". Hoy, en S. José, la mina está funcionando, con la policía de un lado, y del otro, el plantón permanente de la protesta y resistencia de la comunidad local.

A la Amazonia peruana, la represión de la policía llegó en 2009, cuando 6.000 personas ocuparon un pozo petrolífero. De allí, después de una semana, continuaron llegando, a la capital regional, Bagua, otros 5.000 indígenas. "Bloqueamos la carretera durante 15 días", cuenta Edwin. "Luego llegamos hasta la capital de la región, Bagua, y bloqueamos la ciudad entera para que nos escuchasen. Las protestas continuaron durante 54 días. El gobierno no respondió a nuestras llamadas. Nos estábamos marchando pacíficamente e, como respuesta, las instituciones nos obligaron a dejar el lugar". Ha habido cerca de 100 muertos entre los indígenas y, 24, entre los policías (Edwin relata que las víctimas entre las fuerzas de seguridad se debieron a desacuerdos internos, ya que muchos de las fuerzas de seguridad defendían a las comunidades locales); un desaparecido militar, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado, 204 heridos y 700 personas presas.

El "Baguazo", como son llamados popularmente aquellos días de protesta, ha dejado, también, su rastro en la justicia. Todavía hoy, son más de 50, las personas que están siendo procesadas. Entre ellas, ocho, tienen orden de prisión inmediata. El propio Edwin, en aquellos tumultos, perdió un hermano y un sobrino.

La Iglesia testimonia

Junto a los acampados que vigilan la mina San José en Guatemala, se celebra una Misa cada mes, para agradecer por la resistencia, sin que nadie desfallezca.

Después de los enfrentamientos, la Iglesia local, ha tenido un papel activo para aplacar las acciones represivas de la policía y del ejército. Las iglesias locales conocen muy bien el peso de las represiones e intimidaciones que se manifiestan con la violencia de los paramilitares y las tentativas de corrupción encima de los líderes de las protestas.

En la provincia de South Cotabato, isla de Mindanao en Filipinas meridional, la Sagittarius Mine Inc. (SMI) trabaja para la sociedad minera de [Glencore Xtrata](#) en el [proyecto Tanpakan](#), para la extracción del cobre y del oro. "Todavía están en fase de explotación, pero ya están causando muchos problemas al ambiente", observa el P. Joy Pelino, sacerdote que ejerce en la provincia de Cotabato.

La gran mina, además de un fuerte poder de impacto ambiental, se desenvuelve, en su mayor parte, en un área habitada por los indígenas Blàan, que están siendo muy intimidados por su oposición al proyecto. El proceso de persecución y criminalización de los dirigentes empeñados en defender sus tierras y sus derechos, es común por parte de las empresas mineras de la región. Es exactamente a eso que el P. Joy, en nombre de la Iglesia local de Mindanao, está intentando oponerse.

"La ley ambiental de Filipinas, vetaría la utilización de una mina como ésta, a cielo abierto y con 1,2 Km. de diámetro" observa el P. Joy. La compañía, sin embargo, responde que se trata del método más práctico y económico. El proyecto se extendería por 10.000 hectáreas, de los cuáles, 4.000 muy ricos en biodiversidad, con flora y fauna específicas. Seis riachuelos y un lago, en el cuál desaguan manantiales, vendrían a ser contaminados, afectando así, a la agricultura de la zona (plantaciones de piña, plátano, arroz, maíz) y a la pesca. También, en este caso, el impacto ambiental alcanzaría a las categorías más indefensas del pueblo: las minorías étnicas. Es lo que se llama "racismo ambiental".

"La explotación ha sido planeada en el área habitada de los territorios indígenas Blàan. Si todo se encamina como la compañía quiere, los indígenas serán desalojados".

Para los indígenas, la tierra lo es todo: identidad, alma, raíces. Los primeros habitantes de Mindanao fueron los Blàan. Por eso, ellos están resistiendo contra el proyecto minero, pero, están pagando caro por la defensa de sus derechos. "A pesar de que estamos apenas en la fase preparatoria, 15 personas, ya han sido asesinadas en los últimos tres años, entre ellas, una familia entera y dos líderes de la resistencia (padre e hijo), denuncia el P. Joy. Se sospecha que los autores hayan sido los militares y los agentes de seguridad, especialmente de las compañías.

La Iglesia local se posicionó, sin reservas, al lado de los Blàan. Denunció las violaciones, promovió la dignidad de los indígenas, pidió respeto al derecho de autodeterminación, seguridad de las personas y garantía de vivir en paz. Como consecuencia de estas denuncias, los militares, acusados de cometer crímenes contra los indígenas, deben ahora responder delante de la corte marcial.

Convencidos de que la explotación minera no puede balancear el costo ambiental y social, presentamos una reclamación con cien mil firmas, al presidente de Filipinas, mientras los

mismos Blàan, entregaron mil firmas a la Comisión Nacional para los pueblos indígenas, pidiendo que el proyecto Tampakan sea suspenso.

¿Por qué, la Iglesia de Mindanao hace todo eso? "Es nuestro deber buscar la justicia y el bien común para todas las comunidades afectadas por la minería", insiste el P. Joy. "En un clima de sufrimiento y persecución, esa es la misión principal de la Iglesia, que anuncia el Evangelio".

La petición de justicia que nace de las comunidades y de las iglesias locales, encuentra eco y fuente de ánimo en las palabras del Papa, cuando invita a la industria minera, en nombre de aquel "desenvolvimiento integral y sustentable", según la Encíclica Laudato Sí, 13). "La totalidad del sector minero, escribe aún el Papa Francisco, en el mensaje por ocasión del encuentro "Unidos a Dios escuchamos un grito", es indudablemente llamado a realizar un cambio radical de paradigma para para mejorar la situación en muchos países".

Sigue un convite para pasar a la acción: "Pueden dar su contribución, los gobiernos en los países de origen de las multinacionales y de aquellos en los que ellos operan, los emprendedores e inversores, las autoridades locales, que fiscalizan el trabajo de las mineras, los obreros y sus representantes, las fileras de abastecimientos internacionales, con sus varios intermediarios y aquellos que actúan en los mercados de estas materias, los consumidores de mercancías, cuya producción necesita de esos minerales.

Las comunidades locales afectadas por la industria minera, desean que ahora, la Iglesia escuche el grito del pueblo que sufre. Es el momento apropiado para hacerlo, dicen.

ONU

¿Cómo se conjuga el derecho internacional con el tema de la globalización? Una multinacional, no necesariamente, perteneciente al sector minero ¿Puede ser responsabilizada por violaciones de derechos y abusos contra personas y comunidades? En caso afirmativo ¿en qué país debe ser perseguida: no de origen (en donde la Ley acostumbra ser más rígida) o en el país en que opera? También, gracias a la presión de la campaña Treaty Alliance, que reúne centenas entre organizaciones y movimientos del mundo laico y católico, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014 ha votado con mayoría (incluso con la oposición europea, de EUA y del Japón, y la abstención de Brasil) la resolución que impone la definición de un tratado vinculante sobre el tema de las violaciones de los derechos humanos, por parte de las industrias multinacionales. "Una victoria de los pequeños", enfatiza Fray Rodrigo Peret, franciscano de JPIC & Mining Project y miembro de la Treaty Alliance. "Esta decisión de las Naciones Unidas, confiere, de nuevo, al Estado, una tarea que los intereses industriales le habían substraído: la tarea de poner límites a los abusos provocados por la globalización". Una subcomisión de la ONU había propuesto una seria de normas para las corporaciones en 2003, pero no fueran aprobadas. En 2005, el entonces secretario de la ONU, Kofi Annan, dio al académico norteamericano John Ruggie, el papel de Representante Especial en el asunto de empresas y Derechos Humanos. Ruggie trazó líneas para orientar las empresas a evitar abusos en el ámbito de los derechos humanos, que fueran adoptadas en 2011 y denominadas [UN Guiding Principles on Business and Human Rights](#) (UNGPs). Muchas ONGs, sin embargo, criticaron dos aspectos de las líneas de comportamiento trazadas por Ruggie: no eran principios vinculantes para las empresas, y las sanciones eran decididas por las mismas corporaciones que cometían las violaciones. De esas críticas nació la iniciativa del Tratado, que en seguida fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El grupo de trabajo para la redacción del Tratado se encontró por la primera vez en julio de 2015.

Ernest: desastre de Mount Polley

Los efectos de la actividad minera no ahorran ni el Primer Mundo. Entre los mayores está el desastre del Monte Polley, en la British Columbia (Canadá), ocurrido en el mes de agosto de 2014. Por la ruptura de una represa de grandes dimensiones, que contenía restos de una mina de cobre y oro, administrada por la compañía canadiense Imperial Metals, entraron en los torrentes y riachuelos próximos, gran cantidad de metales pesados, entre ellos, níquel, arsénico y plomo. Una vez más, la flora, la fauna y los pueblos vecinos fueron contaminados por los productos contaminantes - en este caso han sido los pueblos nativos, norteamericanos, pertenecientes a las etnias Shuswap e Salish. Representante de la comunidad local afectada por el desastre, el biólogo Ernest Kroeker ha participado del encuentro "Unidos a Dios escuchamos el grito". El lago próximo, que fue contaminado por metales pesados a través de un riachuelo, después de la ruptura de la represa, que es el lugar en donde se reproducen centenas de millares de salmones por año. Estos salmones, que cada dos años suben del mar para reproducirse, exactamente en el lugar en donde nacieron, nadan por el río Quesnel y llegan hasta el océano Pacífico. A lo largo de ese camino, son pescados de modo tradicional, por la población local, que cada año considera, la vuelta de los salmones como un milagro. Aquellos peces, no obstante, serán bien probablemente contaminados y no más comestibles y nocivos para la salud de quien los pesca y come. La empresa minera no se sintió en el deber de limpiar el lago." Ni los legisladores lo impusieron", concluye amargamente Ernest.

Joana

Juana es un ejemplo de luchas y de esperanza. En 2007 la Golden Star, compañía minera canadiense, que opera en Gana, comenzó la extracción en el distrito de Pristea Huni Valley, robando a los campesinos pedazos de tierra con métodos brutales y sin permiso. "De repente, cuenta Ana, aparecieron en los campos letreros alertando: no pasar. Pero era el mes de mayo y no se podía dejar de entrar en los campos para trabajar la tierra". Intervino la policía, que la prendió junto a su ayudante. Así comenzó su calvario: la cárcel y el proceso. "A la policía, he declarado no haber cometido ninguna violación: la tierra robada por la Golden Star me pertenecía a mí y a mis abuelos". "La lucha continuó en el tribunal, en donde he tenido que defenderme sola, dice Juana, porque no tenía dinero para pagar un abogado". Sin embargo, un juez le dio la razón, autorizándola a volver a su tierra. De esta manera, una campesina de Gana, se convirtió para su gente, en un ejemplo, por la determinación y por la fuerza, que ha testimoniado, también en el encuentro "Unidos a Dios, escuchamos el grito". A la lucha de Juana se unió [Waca](#), asociación de Gana, que anima las comunidades afectadas por la minería. "La mina, a cielo abierto ha traído contaminación al aire y al agua, lo que es imprescindible para las plantaciones de que vivimos, en nuestros campos". Después de ocho años, Juana puede decir que la situación ha mejorado porque "las personas tomaron conciencia de sus derechos, en lo que se refiere a la minería". La brutalidad de las desapropiaciones de tierra ha sido bloqueada. Con la presión de las luchas de los campesinos, el Parlamento ghanés aprobó leyes que obligan a consultar a las comunidades locales, antes de comenzar la actividad de extracción.